

Fall 2013

Comercialización contra Capitalización: nuevas visiones de desarrollo en la lucha por la tierra en la Puna

Katherine Luke

SIT Study Abroad, knluke11@gmail.com

Follow this and additional works at: http://digitalcollections.sit.edu/isp_collection

 Part of the [Inequality and Stratification Commons](#), [Peace and Conflict Studies Commons](#), and the [Politics and Social Change Commons](#)

Recommended Citation

Luke, Katherine, "Comercialización contra Capitalización: nuevas visiones de desarrollo en la lucha por la tierra en la Puna" (2013). *Independent Study Project (ISP) Collection*. Paper 1653.
http://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/1653

This Unpublished Paper is brought to you for free and open access by the SIT Study Abroad at SIT Digital Collections. It has been accepted for inclusion in Independent Study Project (ISP) Collection by an authorized administrator of SIT Digital Collections. For more information, please contact digitalcollections@sit.edu.

**Comercialización contra Capitalización: nuevas visiones de desarrollo en la
lucha por la tierra en la Puna**

Nikki Luke

Diciembre de 2013

SIT Argentina: Regional Integration, Development, and Social Change

Buenos Aires, Argentina

Tutoras de Investigación: Liliana Martínez y Maité Llanos

Tutora de Español: Ana Vazeilles

Resumen:

El auge del indigenismo en la provincia de Jujuy, Argentina liderada por la Asociación de los Pequeños Productores de la Puna (la APPP) y la Red Puna ha transformado la relación entre los pueblos originarios y el Estado. Históricamente marginados por el sistema político y económico, una ola de activismo radical empezó con la reforma de la Constitución de la Nación de Argentina en 1994, que por primera vez reconoció la preexistencia de los pueblos originales antes de la formación del Estado Argentino y confiere derechos sobre las tierras comunales y la soberanía cultural. Las manifestaciones y las peticiones que le siguieron en los últimos 18 años como la Puna Roja y la APPP han luchado contra el gobierno provincial y nacional para ganar los títulos de propiedad comunal sobre sus tierras, aumentaron dramáticamente la visibilidad del movimiento indígena.

En 2013, la provincia empezó entregar los primeros títulos de propiedad comunal para los pueblos originarios de la Puna. Mientras que muchas comunidades siguen luchando por la tierra, el foco de la APPP y la Red Puna ha pasado de la confrontación por tierra hasta el subdesarrollo y la pobreza entre los pueblos originarios, que practican una agricultura de subsistencia y la cría de llamas y ovejas. Los esfuerzos actuales de estas organizaciones se centran en la comercialización de las artesanías tradicionales, en particular los tejidos de lana, y la agricultura andina para crear una economía monetaria y una fuente de trabajo para la comunidad indígena, en contradicción a la minera alentada por el gobierno.

Este estudio se basa en el trabajo de campo llevado a cabo en Jujuy y entrevistas con miembros de la Puna Roja y la APPP. Durante mi trabajo de campo, surgieron preguntas acerca de la comercialización de la cultura y la construcción de la identidad indígena a las que espero responder en mi examen de la historia de la lucha por la tierra en Jujuy y sus visiones actuales

para el desarrollo de la región. Trato de responder a las preguntas ¿Cuál ha sido el papel de los movimientos sociales en la lucha por los títulos de tierras comunales? ¿Cómo ha contribuido esta lucha a la consolidación del movimiento indígena? y ¿Qué papel tendrán estas organizaciones en el proceso en curso de desarrollo rural?

Abstract

The rise of *indigenismo* in the province of Jujuy, Argentina led by the Asociación de los Pequeños Productores de la Puna (the APPP) and the Red Puna has transformed the relationship between the “*pueblos originarios*” and the state. Historically disenfranchised by the political and economic system, a wave of radical activism began with the national constitutional reform in 1994 that for the first time recognized the pre-existence of the original pueblos before the formation of the Argentine state and conferred communal land rights and a right to cultural sovereignty. The protests and petitions that followed over the last 18 years as the Red Puna and the APPP have fought the provincial and national government to win the communal titles to their land, dramatically increased the visibility of the indigenous movement.

In 2013, the first communal titles for the *pueblos originarios* of the Puna were achieved. While many communities are still fighting for the land, the focus of the APPP and the Red Puna has shifted from the confrontation over land to the underdevelopment and poverty among the *pueblos originarios*, the majority of whom practice subsistence agriculture or ranch llama and sheep. The current efforts of these organizations are centered in the commercialization of traditional crafts, particularly wool fabrics, and Andean agriculture to create a monetary economy and a source of jobs for the indigenous community of the Puna, outside of the mining encouraged by the Argentine government.

This study is based on fieldwork conducted in Jujuy and interviews with members of the Red Puna and the APPP. During my fieldwork, questions emerged about the commercialization of culture and the construction of indigenous identity to which I hope to reply in my examination of the history of the land movement in Jujuy and their current visions for the development of the region. I seek to answer the questions what has been the role of social movements in the fight for communal land titles? How has this fight contributed to the consolidation of the indigenous movement? And what role will these organizations play in the on-going process of rural development?

Agradecimientos

Quiero agradecer a las personas inspiradoras que me ayudaron muchísimo durante el proceso de este proyecto:

Nuria, Pablo y Julieta, por su consejo durante este semestre en Buenos Aires;

Liliana Martinez, por su amabilidad como tutor y su ayuda en encontrar los participantes;

Maité Llanos, por su inspiración a mirar más allá del status quo

Ana Vazeilles, por su ayuda en la revisión de este documento y su paciencia como aprendí castellano

Toda la gente que conocí durante mi trabajo de campo en el noroeste de Argentina, y especialmente Camila, Esteban, Margarita, Mirasol, Alberto y Flor por las entrevistas que fueron indispensables en la realización de esta investigación;

Valeria, Pilar y Juan, por su apoyo constante durante el semestre entero. Estoy muy feliz y muy agradecida de haber compartido los últimos tres meses con ustedes.

Índice

Resumen.....	2
Abstract.....	3
Agradecimientos.....	4
Índice.....	5
Introducción.....	6
Metodología.....	7
Marco de Referencia.....	11
Marco Teórico.....	15
Análisis	
Una breve historia de la tierra.....	19
La minería y las visiones divergentes entre los pueblos y el estado.....	27
La APPP y la comercialización de los productos agropecuarios.....	30
La Red Puna y la Artesanía.....	33
La politización de la cultura y la construcción de identidad indígena.....	37
Conclusiones.....	39
Bibliografía.....	41

Introducción:

El nuevo indigenismo que emergió en Latino América en el fin del siglo XX empezó como una lucha para corregir la desigualdad social de los pueblos originarios y ganar el reconocimiento de los derechos a cultura y propiedad. En Argentina, la reforma de la Constitución de la Nación en 1994, que reconoció los derechos y la preexistencia etnia y cultural de los pueblos originarios por la primera vez, inició un movimiento marcó por activismo profundo y fuerte como los pueblos organizaron exigir la personería jurídica y los títulos comunitarios del territorio ancestral. Estos territorios actualmente se clasifican como tierra fiscal, lo que significa que los campesinos aborígenes pueden vivir allá, pero no son dueños del territorio hasta completan el proceso para entregar el título. Este trabajo examina la lucha por la tierra en los departamentos de Yavi y Cochinoa en el altiplano, o La Puna, de la provincia de Jujuy.

La Puna es un gran estepa arbustiva ubicada por sobre los 3000 más sobre nivel de mar que abarca y el norte de Chile, parte de Bolivia, el sur de Perú y el noroeste de Argentina. El clima es caracterizado por los extremos de temperatura y las escasas precipitaciones. La mayoría de la población vive en pequeños poblados o asentamientos principalmente sostenida por la cría de ovejas y llamas y la agricultura andina en una economía de subsistencia. Pero, desde 2003, cuando UNESCO confirió el Patrimonio de Humanidad en la Quebrada, una región en la Puna Sur con geología distinta y sitios importantes de arqueología, turismo ha aumentado 8% cada año. En adición, el descubrimiento de depósitos de litio inició inversiones de empresas multinacionales para desarrollar minas en la zona, cambiando la economía regional y las presiones en el medio ambiente.

El desarrollo de estos sectores ha hecho poco bueno para la población de campesinos aborígenes de la etnia Kolla que es caracterizada por altos niveles de pobreza y los problemas

sociales asociados, como altos índices de mortalidad infantil y materna, desnutrición, enfermedades infecciosas, alcoholismo, familias numerosas, fracaso escolar y migración. Espoleado a la acción para corregir estas inequidades y reclamar sus territorios ancestrales, en 1995, la Asociación de Pequeños Productores de la Puna (la APPP) fue fundada para reunir los pueblos de Suripujio, Yavi Chico, San José, Lecho, Casti, Chalgumayoc, Escobar (Tres Cerritos), La Redonda, y Puesto del Marques en los departamentos de Yavi y Cochino y la lucha por la tierra y sus proyectos de desarrollo. La APPP es un socio de la Red Puna, que se conformó en el mismo año, para trabajar a través de la Puna, con 30 comunidades en total.

Durante los últimos 18 años, estas organizaciones encontraron éxito en sus esfuerzos para extender las redes de agua y electricidad, mejorar las infraestructuras de agricultura, como las canales de riego y obtener la personería jurídica por sus integrantes, pero la misión central era la titularización comunitaria de la tierra. Después de 18 años de la acción directa y los conflictos con el gobierno de la provincia de Jujuy, en la primavera de 2013, las primeras comunidades empezaron recibir sus títulos. En este momento de cambios, examiné la historia de estas dos organizaciones, el proyecto artesanal de la Red Puna y los programas agropecuarios de la APPP con el intento a responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál ha sido el rol de las organizaciones sociales en la lucha por la tierra? ¿Con los éxitos en la lucha por la tierra, cuál es su visión por desarrollo rural y cuál será su papel en la consecución de estas metas?

Metodología:

La historia de la tierra en la provincia de Jujuy es una historia que todavía se está escribiendo. Existe poca información disponible y los registros del gobierno son confidenciales o inexistentes. Por eso, esta investigación se basó en gran medida en mis observaciones de campo

y una serie de entrevistas con algunos miembros de la Red Puna y la APPP, un antropólogo y otros profesionales que han trabajado para las comunidades en el tema de la tierra. Estas entrevistas semi-estructuradas fueron realizadas en las casas o las oficinas de la gente que conocí durante diez días de trabajo de campo. En este tiempo, realicé observaciones usando un método de la observación participante en dos situaciones, un taller de tejidos en Maimara y en la carnicería de la Asociación de los Pequeños Productores de la Puna en La Quiaca. En estas situaciones era posible observar las principales actividades comerciales de la comunidad y sus métodos para organizar y promover el proceso de comercialización.

El taller de tejidos es parte de un programa único organizado por la Red Puna para mejorar la productividad de los tejedores tradicionales. En el primer día, yo y otro estudiante con quien estaba viajando llegamos al taller por la tarde. Casi 30 mujeres se reunieron y estaban tejiendo. Nos presentaron al grupo de Liliana, nuestro contacto en Jujuy que trabaja para la Red Puna. Inmediatamente, empecé trabajar con una mujer que estaba enrollando madejas largas de lana en pelotas para otras mujeres que estaba haciendo suéteres. Por algunas horas charlamos y trabajamos antes de la cena compartida. Durante mi tiempo del trabajo en el campo, tanto en Maimara como en La Quiaca, después de una reunión, siempre compartimos alguna comida o por lo menos una taza de té.

Durante los dos días siguientes, asistimos al taller y observamos el trabajo de las mujeres y los seminarios sobre los modelos, las tintas y los métodos. La negociación de los precios de los suéteres y la distribución de las ganancias entre la Red Puna y los diseñadores que promocionan los productos, era una observación única de las relaciones económicas entre las mujeres indígenas y otros actores, especialmente debido al hecho de que este taller invierte el papel tradicional de las mujeres en el que ellas tienen poco poder para negociar. Después de la

conversación de precios, tuvimos la oportunidad de entrevistar a una organizadora de la Red Puna y a dos mujeres que son las presidentes de sus comunidades en distintas micro redes de la Red Puna. Para otro estudiante y yo que hemos decidido para concentrar nuestros estudios en diferentes partes de Jujuy, fue clarificador escuchar las muy diferentes experiencias de estas tres mujeres con distintas historias con respecto a su involucramiento con la Red y sus experiencias con comercialización.

Gracias a los contactos de Liliana, mi tutora en la zona, fui a La Quiaca en el Departamento de Yavi para investigar la región de una de las mujeres con más profundidad. En La Quiaca, me quedé en *La Casa de la Campesina*, un edificio que consta de una carnicería, la oficina de la APPP, una cocina y un dormitorio para visitantes y el taller de los productos de llama en el que se hacen salamis, lomos y jamón de llama. Por cinco días, trabajé con ellos en la carnicería y la sala de embutidos y me senté en las reuniones cotidianas, observando el proceso de la comercialización de la carne de llama y el papel de la APPP en este proceso. También, pasé un día San José, un pueblo 15 kilómetros afuera de La Quiaca. En la semana antes de llegar, la provincia ha entregado su título comunitario de San José después de 10 años de confrontación con el gobierno. Mi segundo día en la zona, asistí una ceremonia de Pacha Mama para dar gracias por la tierra y este título, después de que comimos un festín, usando productos que cultivaban en San José.

La ceremonia de la Pacha Mama fue una introducción a las tradiciones fuertes y compartidas entre estos pueblos en su larga lucha por el derecho a su territorio y para preservar sus prácticas culturales. Durante los siguientes cuatro días, observé las funciones de *la Casa de la Campesina* y charlé con la gente que pasó por la Casa. En algunos aspectos, la Casa funciona como un centro comunitario para los pueblos originarios de la zona. Cada día, algunos vecinos o

algunos compañeros pasaban por una taza de té o para preguntar sobre un programa social de la organización. Tuve la oportunidad de hablar con muchos compañeros y entrevistar a dos presidentes de diferentes pueblos en la APPP y tres directores de la organización en la Casa de la Campesina. Camila, una miembro inicial de la APPP y una compañera de Liliana, arregló todas las entrevistas. Aunque ella me había advertido que podría ser difícil asegurar entrevistas ya que muchos otros estudiantes y trabajadores para ONGs han pasado por La Quiaca para estudiar la región y no habían cumplido sus promesas de mantenerse en contacto con la organización, todas las personas que conocí, incluso otros que no entrevisté, fueron simpáticas y estuvieron dispuestos a hablar de su trabajo, su comunidad y la organización.

En esta investigación, utilicé un metodología de muestro teórico. Quería explorar la relación entre los movimientos sociales y la lucha por la tierra en la Puna, pero mis conclusiones se originaron a partir de mis observaciones y mis conversaciones en el trabajo de campo. Debido a la barrera del idioma, grabé las entrevistas para poder volver a escucharlas y más tarde cifré mis notas y las entrevistas de los temas generales de producción de llama, agricultura, tierra, revalorización de cultura y programas y relaciones estatales. Estas observaciones de los miembros de la APPP fueron las más importantes para construir una hipótesis y determinar un marco teórico. Sin embargo, aunque tenía páginas de notas de percepciones e historias, era difícil obtener información más concreta.

Cuando volví a la Quebrada para usar la biblioteca del Departamento de Arqueología en Tilcara de la Universidad de Buenos Aires y entrevistar a una abogada del gobierno que trabajaba en la administración de la tierra y un arqueólogo que estudia la historia de los pueblos originarios, los dos proveyeron detalles administrativos e históricos sobre la zona. Ellos fueron conscientes de sus papeles como profesionales afuera de las comunidades—sus descripciones,

impresiones y conexiones eran diferentes y más cuantitativas que las de la gente que trabajan en la Red o por los pueblos originarios. Esto resultó ser otra observación interesante, ya que ambos explicaron que la mayoría de la gente que estudia los pueblos originarios o trabaja en los departamentos del gobierno son “gringos,” con una experiencia cultural que es diferente de la de la gente indígena de Jujuy. Estaba agradecida de escuchar las dos perspectivas y obtener una mejor comprensión de la relación entre los pueblos originarios y el Estado.

Para verificar la información de mis entrevistas y observaciones, utilicé crónicas escritas de la organización (la Red Puna cuenta con un sitio de web y publica un periódico cada dos meses) y los artículos de los periódicos nacionales y regionales. Finalmente, usé los archivos de la biblioteca en Tilcara y una encuesta de la literatura académica para explicar mi marco de referencia, que consiste en un resumen de la lucha histórica por la tierra en la provincia de Jujuy y el desarrollo de la Red Puna y la APPP. En mi marco teórico, contextualizo esta radicalización de los pueblos originarios, usando las teorías de E.P. Thompson y Arturo Escobar para explicar el papel de activismo en la construcción de la identidad indígena.

Marco de Referencia

Con la llegada de la revolución verde el paisaje del campo de Latinoamérica ha cambiado dramáticamente. La revolución verde tuvo sus inicios en los años setenta y fue producto de la apertura del mercado a las políticas neoliberales de la dictadura, lo cual tuvo diversas consecuencias tales como la mecanización y la introducción de las semillas transgénicas que contribuyeron al aumento de los latifundios en detrimento de las pequeñas propiedades rurales. El proceso de globalización impulsó estos cambios también. Cuando los países latinoamericanos disminuyeron los aranceles y otras medidas de protección, muchos productos extranjeros baratos

inundaron sus mercados y causaron el colapso de algunas industrias junto con la inestabilidad en el mercado en general. Para responder a la hiperinflación que resultó de los cambios en el mercado, Presidente Carlos Menem estableció el Plan de Convertibilidad por Argentina en 1991 que fijó el peso al dólar. El aumento en el dólar paralizó los exportadores de alimentos, especialmente los productores pequeños, lo que incrementó la desposesión de los campesinos.

A pesar de la caída en rentabilidad de la agricultura durante esta época, la producción de soja se expandió dramáticamente en la medida en que los productores grandes compraron las chacras de campesinos insolventes y las tierras fiscales que el Estado empezó vender en 2003. Con este proceso los pequeños agricultores se han visto obligados a abandonar sus tierras y como resultado, el porcentaje de la población en zonas urbanas en Argentina aumentó del 84% al 93% entre 1982 y 2012 (Banco Mundial). Este desplazamiento de los campesinos y la consolidación de agroindustria contribuyeron a la explosión de la soja por métodos industriales:

la aplicación de la biotecnología a la producción agropecuaria, la concentración y orientación exportadora, y la ruptura de los marcos institucionales y las regulaciones estatales para el sector. El capital cada vez más concentrado y capaz de intervenir directamente en la producción agropecuaria mediante la biotecnología (Bravo et. al., 2010, p.34)

Como resultado de esta mecanización, hoy en día, Argentina es el tercer productor más grande en el mundo con 17 millones de hectáreas (una mitad de toda la tierra debajo de cultivación) que se siembran con soja. La mayoría de esta producción se destina a la exportación. En 2008 Argentina exportó 70.000 millones de dólares, los productos agrícolas representaban 40.000 millones de dólares, de los cuales 24.000 eran productos de soja (Pontón, 2008, p.2). En el futuro, se espera que la demanda internacional de la soja argentina, especialmente de China, aumente de forma exponencial.

Ya existen preocupaciones serias sobre el impacto de la soja en el medio ambiente, particularmente en la contaminación de agroquímicos y la erosión de la capa superficial del suelo. Pero, con este crecimiento en producción, la importancia de soja al mercado argentino está creciendo también, como se observa en el siguiente dato: entre 1993 y 2013, la agricultura como un porcentaje del producto bruto interno aumentó de 5% a 10% (Banco Mundial). La soja genera ingresos públicos importantes para el Estado gracias al impuesto del 35% en la exportación de la soja que ha hecho posible los nuevos programas *kirchneristas*, como la Asignación Universal por Hijo. Por eso, se puede ver que el Estado no parece tener en cuenta las consecuencias sociales y ambientales en pos del interés de la explotación de la dotación de recursos naturales y así obtener las rentas más altas posibles. El mismo proceso se repite en Patagonia con el contrato de fracking con Chevron y en Jujuy y en Salta con la explotación de litio por las fabricadas de automóviles japonesas (Soberanía y recursos naturales, 2013). Pero esta visión de desarrollo no crea vínculos a otros sectores, ni trae trabajos en industria que den más valor agregado.

De hecho, parece que Argentina está en un proceso de la desindustrialización que contradice los modelos occidentales de desarrollo, tal como la idea de despague hacia una sociedad de consumo masivo de Walter Rostow¹. A des través de América Latina, la tendencia hacia la explotación de los productos primarios están transformándose en un fenómeno que se llama “La Reprimarización”, caracterizada por la “recuperación de los sectores primarios en el producto agregado y en las exportaciones (retorno de las economías “primario—exportadoras”) [... y el] retroceso del sector manufacturero (pérdida de importancia o abandono del proyecto de industrialización)” (Nadal, 2009). Aunque la agricultura y la minería se están expandiendo, hay

¹ En su libro de 1960, *Las Etapas del Crecimiento Económico: Un manifiesto no comunista*, Walt Rostow, el Asesor de Seguridad Nacional de la administración Kennedy, postuló que todos los países pasan por cinco etapas de desarrollo: la sociedad tradicional, las condiciones previas para el despegue, despegue, salida hacia la madurez y la edad de consumo de masas. Suponiendo que todos los países sigan el mismo camino lineal, la antítesis de un modelo marxista, Rostow afirmó que todos los países siguen este patron de industrializacion.

una serie de consecuencias negativas de la vuelta a una economía de producto primario basado en las exportaciones, como ya se ha visto en el desplazamiento de los campesinos de sus tierras por las grandes corporaciones. En lugar de generar vínculos en todo el mercado, sólo se crean puestos de trabajo temporales durante la cosecha o construcción y la rentabilidad de cada industria depende de los precios establecidos en el mercado internacional. En este sentido la reprimarización señala una vuelta de las relaciones de dependencia que la industrialización por sustituciones de importaciones trató de romper.

Frente a este programa de explotación, las organizaciones sociales que conocí durante tres meses en el Cono del Sur están trabajando por una visión de desarrollo sustentable. En Asunción, Paraguay asistí a una conferencia en el Día de la Soberanía Alimentaria que organizó la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI), sobre su lucha en contra de Monsanto y las semillas transgénicas. CONAMURI opera un banco de semillas para los campesinos para preservar la biodiversidad nativa. En Porto Alegre, Brasil, visité uno de varios asentamientos del Movimiento de Trabajadores sin Tierra que mantiene una chacra comunitaria. En Argentina también, el Movimiento Nacional Campesino Indígena reúne a las organizaciones regionales, como la Red y la APPP. Aunque los campesinos no cuentan con el dinero suficiente para luchar frente las empresas nacionales o rebatir el desarrollo irresponsable estatal, juntos forman un bloque de votantes y luchadores que están trabajando para cambiar la explotación del medio ambiente y la vida campesina. También, cada grupo conforma la Vía Campesina, que aboga por la agricultura sustentable en un nivel mundial, visibilizando el activismo campesino que tiene una tradición muy larga en la lucha contra el capitalismo.

Marco Teórico:

En el siglo XIX el desarrollo capitalista del mercado de Europa se enfrentó violentamente a movimientos de acción colectiva, como la liga en contra de las leyes de cereales y el Cartismo en Inglaterra. En la crónica de estas luchas, en su ensayo *La economía moral de la multitud en Inglaterra* (1971) E.P. Thompson ofrece una explicación de las manifestaciones por los alimentos británicos del siglo XIX, que afirma que las protestas no eran turbas, sino acciones directas políticas (Thompson, 1971, 79). En contraste a otras opiniones anteriores que clasificaron las revueltas como un acontecimiento en la historia económica sin importancia del comportamiento irracional, Thompson busca proveer un contexto de historia social, explicando que los pobres y los desempleados, privados de los derechos políticos y poder económico, organizaron las manifestaciones para forzar a que las tiendas fijaran un precio justo por el pan. Este movimiento se originó en el contexto del feudalismo, en el cual, el dueño de una finca era responsable por sus trabajadores aun en años de privación. Con el proceso de urbanización y la transición a un mercado libre, los campesinos protestaban con el intento de asegurar un compromiso que garantizara el acceso a las necesidades básicas mínimas.

Thompson concibió la economía moral como un principio de protección para los pobres sin poder en el mercado (Thompson, 1991, 337), pero, en su libro, *La economía moral del campesino* (1976), James Scott aplica las ideas de Thompson para construir un sistema de valores en la cultura campesina. Scott sostiene que los campesinos creen que tienen derecho a precios justos, al acceso a la tierra, a mecanismos redistributivos y a algunas formas de reciprocidad con las élites. En esencia, Scott dice que los campesinos reclaman los derechos necesarios para mantener “la seguridad de subsistencia,” y el derecho de organizarse cuando esos derechos estén amenazados (1976). América Latina ha sido testigo de tal militarización de los campesinos para implementar el paradigma de una economía moral, como se puede ver en el

Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra en Brasil y las manifestaciones contra el OMC (Edelman 2005). En Argentina, donde tanto campesinos como indígenas carecen de derechos claros de propiedad en muchas instancias, el Movimiento Nacional de Campesina Indígena ha vinculado estos temas ya que su lucha consiste en “lograr la Reforma Agraria Integral y la Soberanía Alimentaria a través de la Organización Popular” (Quiénes somos?).

En las distintas luchas de América Latina, durante 30 años de los programas neoliberales, la población rural se ha enfrentado a cambios estructurales que impiden su subsistencia y amenazan su modo de vida cultural con la mecanización de agricultura y la degradación del medio ambiente con el aumento en la producción de soja, azúcar y aceite de palma. En la misma línea de los disturbios por los alimentos de Inglaterra, los movimientos campesinos en América Latina hoy en día protestan por una distribución desigual de la tierra y su pérdida de poder en el mercado. Con el uso de la acción directa y popular, tales manifestaciones en contra de Monsanto u ocupaciones para ganar los títulos de la tierra, los campesinos afirman su lugar en la economía y la tradición cultural de la región.

En esta lucha para defender la relevancia y el modo de vida de los campesinos, los pueblos originarios tienen un papel distinto; muchas veces los aborígenes viven como campesinos, por agricultura o ganadería, pero en su ensayo *El concepto de indio en América*, Guillermo Bonfil Batalla explica que en la construcción de una identidad y un movimiento indigenista existe una distinción “que separa a ciertas poblaciones indígenas de sus vecinas rurales que no caen dentro de aquella categoría” (n.d., 3). En busca de una definición, parece que lo indígena no se puede definir como solo un rasgo, ni idioma, ni territorio, más bien, en el año 1949, el Segundo Congreso Indigenista Interamericano, afirmó esta definición del indio:

El indio es el descendiente de los pueblos y naciones precolombinos que tienen la misma conciencia social de su condición humana, asimismo considerada por propios y extraños, en su sistema de trabajo, en su lengua y en su tradición, aunque éstas hayan sufrido modificaciones por contactos extraños. Lo indio es la expresión de una conciencia social vinculada con los sistemas de trabajo y la economía con el idioma propio y la tradición nacional respectiva de los pueblos o naciones aborígenes (Actas Finales, 1959, p. 86-87)

Debido a su preexistencia social y cultural, la primacía de sus concesiones territoriales como los habitantes primarios de las Américas y la historia de opresión en la que su cultura sistemáticamente fue reprimida, los pueblos originarios reciben derechos especiales del Estado, a diferencia de los campesinos que no están protegidos, como muestra en la Constitución y el Convenio 169 de la OIT. Estos tratados pretenden proteger su herencia cultural única, así como la capacidad de tener propiedad comunitaria y las escuelas en la lengua materna.

No obstante, en muchas prácticas actuales, como la distribución de la tierra en Jujuy, persisten la discriminación y un tratamiento desigual. En el mantenimiento de la cultura tradicional hoy en día, “el problema consistiría en definir si la persistencia de la categoría social indio corresponde efectivamente a la persistencia de una situación colonial o si debe entenderse como un remanente que ya no está sustentado por el orden social—colonial—que le dio origen” (Bonfil Batalla, n.d., 10). De esta perspectiva, la psique actual de los pueblos originarios es definida por la historia de la dominación, que es “una narración ideológica, cuyo correlato empírico son los intentos de expropiación/apropiación, y su lado oscuro, silenciado, negado son las múltiples formas de resistencia y lucha de los pueblos oprimidos” (Belli, Slavutsky y Pueda, 2007, p. 113).

Entonces, la reproducción del colonialismo y la discriminación continúa en nuestra imagen popular, en la cual los pueblos originarios se ven como atrasados y en conflicto con la sociedad moderna y el ideal occidental del progreso (Fernández, 2009). En algunos aspectos, esta perspectiva es verdad, si bien, como Arturo Escobar argumenta en su ensayo *América Latina en*

una encrucijada, esta perspectiva asume que nuestra construcción de la modernidad con la economía independiente de nuestro ámbito social y el mercado como una identidad importante e independiente ha emergido en “algunas formas socio-naturales, tales como capitalismo, el estado, el individuo, la agricultura industrial” que impone una visión de ontología dualística que divorcia la cultura y lo natural (2006). Sin embargo, en lugar de adherirse al sistema dualístico moderno del capitalismo, al que la cosmovisión de los pueblos originarios es diametralmente opuesta, los indígenas han mantenido sus tradiciones y sus prácticas en su “quehacer cotidiano de reproducción de la vida y transformación de la realidad” (Belli, Slavutsky, y Pueda, 2007, 116). Con la radicalización de los movimientos indígenas, así también, la vida cotidiana ha mostrado una politización, la cual Escobar describe:

mucho más allá de un ‘giro a la izquierda’, estos ‘mundos y conocimientos de otro modo’ tienen el potencial para desnaturalizar la distinción hegemónica entre la naturaleza y la cultura en la que el orden liberal se funda y que a su vez sirve de base para las distinciones entre civilizado y los indios, colonizadores y colonizados, desarrollados y subdesarrollados(Escobar, 2006, p.39).

Su lucha por los títulos comunitarios que preservan el estilo de vida colectivo, un parte esencial a la cosmovisión de los pueblos originarios, no representa una regresión, sino un paradigma comunitario que rechaza la campaña de desarrollo propuesto por el Estado y el mercado capitalista. El sistema comunal implica:

1. El desplazamiento del sistema capitalista con el crecimiento en las empresas comunales
2. La aparición de formas comunales de democracia
3. La garantía de pluralismo cultural en las interacciones interculturales de varios seres

(Paco 2004, p. 190).

Subrepresentados y desatendidos en nuestro mundo contemporáneo, en la lucha por sus derechos constitucionales que incluyen la protección de la propiedad comunitaria, las organizaciones de

los pueblos originarios proponen una nueva hegemonía, que rompería con las relaciones de colonialismo que persisten hoy en día en la discriminación social de los pueblos originarios y las agendas que explotan el medio ambiente.

Análisis:

Una breve historia de la tierra

El estado colonial es definido por las relaciones entre los dueños y los desposeídos. Con la llegada de los españoles a la Puna en el siglo XVI, el mundo de los pueblos originarios fue transformado con el comienzo del proceso de privatización y cooptación de la tierra.

Inicialmente, fuera de los impuestos requeridos por los españoles, la Puna se mantuvo prácticamente sin cambios ya que el ambiente disuadió a los colonos. Pero, la desposesión y empobrecimiento de los indígenas aumentó con la expansión del estado Argentino en las campañas nacionalistas del siglo XIX cuando los inmigrantes y los negocios interesados en la explotación minera ocuparon el territorio de esta zona que fue distribuido en grandes fincas. Esta reorganización por “el proceso latifundista” se reafirmó en la ley de enajenación de 1891, “cuya reglamentación establecía que los campesinos serían favorecidos sólo en caso de igualdad de ofertas”. Hacia 1910, el 7% de la tierra que representaban el 66% de la riqueza estaba en manos de latifundistas y los pueblos originarios solo conservaron la tierra de menos valor (Teruel y Fandos, 2009, p.242). A pesar de la oposición vocal y violenta de los pueblos originarios, el resto de la tierra fue declarada propiedad de la provincia (Madrazo, 1982, p.174).

Una serie de varios intentos por distribuir las tierras de las grandes fincas, especialmente con la llegada de democracia durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, produjo promesas del gobierno pero pocos resultados. En general, en una nación concentrada en la consolidación de

una identidad europea y la construcción de una economía moderna, los pueblos originarios permanecieron como una minoría estigmatizada, si no olvidada (Madrazo, 1982, 175). Con los cambios en el gobierno después de la Segunda Guerra Mundial, los líderes de los pueblos kollas, trataron otra vez de asegurar la restitución de sus tierras. En 1946, los indígenas del Noroeste Argentina organizaron una marcha de 1300 kilómetros entre San Salvador de Jujuy y Buenos Aires que buscó visibilizar la situación de los pueblos originarios. Para evocar una imagen histórica de sublevación y en repudio a las invasiones del Estado Argentino en la Guerra del Desierto y otras campañas, la marcha se llamó el Malón de la Paz. Por tres meses, 179 originarios caminaron o montaron mulas para reunirse con el nuevo Presidente Perón. Cuando llegaron en agosto, él prometió empezar el proceso de la expropiación de la tierra, pero después de tres semanas, la policía desalojó a los indígenas de su hotel en la Capital y los forzó a volver a Jujuy en tren (Belli y Slavutsky, 2007, 120). A pesar del fin violento al Malón de la Paz, en un decreto de 1949, firmado por Perón, se delineaba el “propósito de solucionar el problema indígena de la región, procurando tierras a los pobladores para su radicación y subsistencia” y 58 rodeos en siete departamentos de Jujuy fueron traspasados al gobierno provincial (Madrazo, 1982, 1975).

Pese a que la tierra fue disponible para el uso de los pueblos originarios, ellos no eran dueños de su territorio ancestral. Solo con el fin de la dictadura en los años ochenta, empezó un diálogo interno sobre la defensa de los derechos humanos que “no se circunscribió al problema del genocidio político exclusivamente. Los organismos de derechos humanos hicieron también suyo el reclamo de sectores marginados y minoritarios de la sociedad, entre ellos el de la población indígena del país” (Mombello, 2002, p. 8). En 1986 Jujuy se convirtió en la primera provincia que extendió los derechos específicos de pueblos originarios cuando el Artículo 50 fue

añadido a la Constitución Provincial para “proteger a los aborígenes por medio de una legislación adecuada que conduzca a su integración y progreso económico y social” (Constitución de la Provincia de Jujuy). Otras provincias siguieron, llevando eventualmente a la reforma de La Constitución de la Nación en 1994. En el artículo 75, inciso 17 que se titula, “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos” se propone:

Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.

La declaración “produjo una visibilización de la resistencia” de los pueblos originarios, ubicando “la cuestión indígena en la agenda política” de Argentina (Belli y Slavutsky, 2009, p. 145) que continua con la ratificación en 2000 del Convenio 169 del Organización Internacional de Trabajo, un instrumento jurídico internacional vinculante que protege las culturas únicas de los pueblos originarios y concede “el derecho a decidir las prioridades para el desarrollo” (Convenio No. 169). Durante esta década, algunos han argumentado que las acciones del gobierno nacional intentaron apropiarse del movimiento indígena en el programa progresivo del nuevo estado liberal a través de políticas tales como el respaldo del Programa de Participación de los Pueblos Indígenas (PPI) de la Organización de los Estados Americanos. También, se ha dicho que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que es responsable por la promulgación de las políticas relativas a los intereses aborígenes y provee los fondos para la distribución de la tierra a

los gobiernos provinciales, trata a “los indígenas más como solicitantes y destinatarios de apoyo que como participantes autónomos en la tomas de decisiones” (Briones y Carrasco, 2006, p. 202)

Al mismo tiempo, en los años siguientes de la reforma constitucional, surgió en Argentina una consciencia del nuevo indigenismo, que se extendió por toda América Latina con el aniversario de los 500 años de la invasión española (Belli y Slavutsky, 2009, 145). En Jujuy, en esta época, ocurrió la fundación de la APPP y la Red Puna, cuyo objetivo principal era “una transformación profunda de las estructuras de nuestra sociedad y de nuestro país” (“Quienes somos”). Este movimiento social unió las comunidades en una lucha mucho más radical, inspirada por la meta política de romper las normas hegemónicas de discriminación y abuso y los deseos económicos y sociales con el objetivo de “generar transformaciones más profundas para los excluidos del sistema dominante” (Golsberg y Martinez, 211).

Con este fin, la Red también funciona como una cooperativa de productores que tratan de fomentar independencia económica viable por la comercialización de bienes tradicionales. La Red Puna se compone de cinco diferentes micro redes que corresponden a diferentes zonas de Jujuy² y enfrentan problemas específicos de producción y medio ambiente. Las micro redes tienen reuniones mensuales para delinear las metas y dirigir los programas del grupo. Inicialmente, la Red fue diseñada como un centro para las organizaciones y una agrupación a través de la cual pueden abogar como un colectivo, particularmente para combatir las barreras estructurales de desarrollo que empeoraron con el aumento en desigualdad de los años noventa y para ayudar en la lucha por la tierra.

Camila: no teníamos personaría jurídica era como a que objetivos, como seria el trabajo, comisión directiva como así, mas internamente, sin papeles, y esta, y estamos también a trabajar

²Las micro redes son Micro red Quebrada de Juella, Maimara, Humahuaca y Tilcara, Micro red Puna norte de La Quiaca e Interior, Micro red Puna sur del Moreno y El Angosto, Micro red Puna oeste de la Rinconada, y Micro red Centro de Abra Pampa.

en todo que viene en el tema de la tierra, personería jurídica de las comunidades, armada de estatutos, empezar organizar en la comunidad, reunirnos, que llevo un proceso y con el tiempo hoy por hoy este seguimos digamos en el tema tierras

En 1997, tres años después de la reforma de la Constitución, el gobierno provincial de Jujuy inició el Programa de Regularización y Adjudicación de Tierras a Poblaciones Aborígenes de Jujuy (PRATPAJ) para supervisar la distribución de la tierra. Después de que una comunidad recibe su personería jurídica del INAI, necesita entregar una breve historia, un croquis, un censo y los papeles de personería jurídica al Departamento de Derechos Humanos. Antes de que un pueblo reciba la escritura, los papeles pasan por un circuito interno administrativo entre el INAI, el Departamento de Derechos Humanos, la Oficina de Fiscalidad del Estado, la Dirección de Inmuebles y finalmente, si los territorios están en la zona de seguridad en la frontera de Bolivia deben pasar también por el Ministerio del Interior Nacional. En total, el proceso requiere cinco años o más. En 2003, obligado por el primero de una serie de juicios nacionales para expedirse sobre la distribución de la tierra, la provincia estableció el Instituto Jujeño de Colonización, que regularizó los territorios de una manera particular. La Constitución garantiza “la posesión y propiedad comunitaria de las comunidades,” que es un tipo de posesión distinta en la cual los miembros del pueblo son dueños del territorio comunal. Sin embargo, en lugar de los títulos comunitarios, el Instituto provincial promovió títulos privados (que pueden ser vendidos) o con estipulaciones que protegían los intereses estatales.

Frente a la resistencia de la provincia, el 7 de agosto de 2006, la Red organizó el Segundo Malón de la Paz que marchó en la Casa del Gobernador de Jujuy para exigir que la provincia respetara sus derechos constitucionales y entregara los títulos comunitarios. Este evento representó un capítulo importante en la consolidación de la identidad indígena con la

recuperación de una imagen histórica que llamó atención sobre la opresión continuada en Jujuy.

Durante esa marcha, pasaron volantes en los que se podía leer:

Este Estado, representado por Kirchner y Fellner³ con su actual política populista intenta seducirnos con sus palabras revolucionarias y desarrollistas para negociar y embaucarnos con sus leyes y reformas

Este Estado argentino que no escuchar y reprime a los pueblos originarios (como hoy lo hace con los tobas, guaraníes, wichis, mapuches) es el que asesinó a nuestros abuelos luego de la Batalla de Quera (1875), el que echo a patadas a nuestros abuelos y abuelas en el Malón de la Paz (1946).

¿Hoy debemos seguir pidiendo a nuestros opresores y besando nuestras cadenas?

Con nuestras wiphalas blancas y de colores y junto a nuestros ancestros reafirmamos un camino independiente en la reconstitución de nuestro Qollasuyu (Nación kolla)

KAUSAJCHUN KOLLASUYU

JALLALLA QULLASUYU

POR LA RECONSTRUCCION DE NUESTRA NACION KOLLA (Citado en Belli, Slavutsky, y Pueda, 2007, p. 129)

En las críticas del estado presentadas aquí, la manifestación adoptó una retórica más urgente y más acusatoria, identificado con el movimiento pan-andino renovado por la elección en enero de 2006 de Evo Morales, el primer presidente indígena en las Américas.

El resultado del Segundo Malón fue la ley nacional 26.160 promulgada el 23 de noviembre de 2006, que “Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas”(Ley 26.160). Además, la ley suspendió el desalojo y la desocupación de las tierras identificadas como indígenas y creó un Fondo Especial para las comunidades (Ley 26.160). A pesar del apoyo financiero del gobierno, la provincia fracasó en la distribución la tierra. El tema más controvertido eran las zonas urbanas que la provincia omitió del título para preservar un espacio para la provisión de servicios públicos. Para los pueblos originarios, tales títulos “malos” o incompletos representaban un intento por parte del Estado de socavar su soberanía cultural y una infracción de sus derechos constitucionales.

³El gobernador de Jujuy entre 2003 y 2007 (<http://www.eduardo-fellner.com/cv.php>)

En octubre 2011, por tres días una coalición de las comunidades cortó la ruta nueva en Purmamarca en una manifestación contra la mina de litio y por su título a la tierra. Por esta acción el gobernador comprometió la entrega de los títulos comunitarios en plazos de 30, 60 y 90 días, incluso la tierra de las comunidades que había recibido títulos incompletos (Red Puna). Esto incluyó a 55 comunidades que habían empezado el proceso debajo de PRATPAJ⁴, pero ninguna recibió los beneficios prometidos. Por el fracaso en la distribución de la tierra, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) no renovarían la financiación para el gobierno de Jujuy hasta que las metas y los plazos de ejecución fueran reformulados (Fernandez, n.d.). Sin dinero, todo el trabajo en el ámbito provincial detuvo. En abril de 2013, cerca de mil compañeros de la Red Puna de 75 comunidades marcharon en la Plaza Belgrano en San Salvador de Jujuy, el 22 de abril 2013, para entregar algunas demandas al gobernador. El acta que resultó de esta manifestación prometía:

1. Conformar una mesa institucional para el trabajo conjunto por la entrega de los títulos de propiedad comunitaria, integrada por las autoridades del estado y por las representaciones de las comunidades
2. Garantizar la reunión mensual de dicha comisión
3. Realizar la ley 5.695-11 que otorgar la exención del impuesto inmobiliario a las comunidades y expandir esta excepción a las comunidades cuyos títulos comunitarios fueron entregados con anterioridad a la vigencia de dicha ley
4. Agilizar la previa conformidad del ministerio de Interior para aquellas comunidades cuyo territorio se encuentra ubicado en zona de seguridad

⁴Entre los fracasos de este acuerdo se puede incluir el hecho que ni siquiera abordó las comunidades que no habían empezado el proceso de titularización o fueron centrados en tierra privada que no fue expropiado por el estado en el decreto de Perón de 1949

5. Incorporar al análisis de la comisión los remanentes de tierras pendientes de titularizar
6. Gestionar ante los legisladores nacionales jujeños la prórroga de la vigencia de la Ley 26.160 y la suspensión de los desalojos (“Los derechos no se esperan...” 2013)

Durante los últimos meses de 2013, algunas comunidades han recibido sus títulos comunitarios, aunque por ejemplo, entre la APPP existen comunidades con título, otras en el proceso y todavía otras que no han empezado. La lucha por la tierra es un proceso en curso y la carga recae en las comunidades debido a que la entrega del título comunitario depende de la organización y el compromiso del pueblo. Sin embargo, desde el primer Malón de la Paz, los avances en la ampliación de los derechos de los pueblos y la protección del territorio originales han sido el resultado directo del activismo, claramente siguiendo acciones llevadas a cabo por organizaciones como la Red Puna. Aunque su importancia no puede ser cuantificado claramente, el trabajo de las organizaciones sociales en la movilización de las comunidades ha reconfigurado la relación entre el Estado y la población indígena.

Pero, este activismo siempre ha estado descrito como una lucha por la tierra hace 500 años. Con algunos logros ya visibles, las organizaciones necesitan cambiar sus mensajes y su retórico como el movimiento social se transforma. Cuando le pregunté a Alberto, el presidente de una comunidad que recién ganó el título, ¿cuáles son las preocupaciones más grandes de su comunidad?” Él rápidamente respondió, “el título,” y siguió,

Pero logramos tener el título, y ahora que tenemos título, ojala que los hermanos cambien, la gente de la comunidad cambien y pensemos en algunas otras cosas que crean una fuente de trabajo para nuestros jóvenes, para nuestras niños, tenemos muchas cosas para hacer, es una cuestión de dedicación, que se dedican, que queremos como un objetivo donde queremos llegar, más allá que la plata, como hace más falta plata.

Como las comunidades reciben sus títulos, la pregunta que queda es la forma en que estas organizaciones sociales cambiarán para reflejar las necesidades en curso en sus comunidades y cuáles serán sus estrategias para un programa de desarrollo específico para satisfacer las necesidades de la cultura y la región.

La minería y las visiones divergentes entre los pueblos y el estado

Los territorios de los pueblos originarios habían sido caracterizados por una falta de acceso a servicios públicos. Hay poca información específica disponible, pero, según al censo de 2010 de la nación de Argentina, las categorías limitadas en los que la información demográfica ha sido agregada por la población indígena, muestran menores tasas de alfabetismo y acceso a la seguridad de salud y los beneficios de jubilación (Resultados definitivos). Una encuesta de 500 niños en Jujuy y Catamarca reportó los niveles altos de malnutrición asociados con las desventajas económicas de la zona (Romero et.al., 2005), y en adición, la APPP auto-reportó “los problemas sociales típicos de la pobreza: altos índices de mortalidad infantil y materna, desnutrición, enfermedades infecciosas, alcoholismo, familias numerosas, fracaso escolar y migración” (Caudullo y Copa, n.d., 14). Todavía, menos del 50% de los pequeños agricultores de Jujuy tienen agua corriente, luz o un sistema de cloaca (Registro Nacional, 2012). En general, la falta de datos censales, los encuestas demográficos o los reportajes oficiales por el con o el Departamento de Derechos Humanos sobre este sector de la población es “un efecto de este proceso de invisibilización y borramiento de lo indígena por parte del Estado” (Carrasco, 2000).

Indicadores del Censo de 2010

Indicador	Población nacional	Población indígena	Población de Jujuy	Población indígena de
-----------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------

		nacional		Jujuy
% de los ciudadanos analfabeta	1,92%	3,68%	3,13%	3,71%
% de los ciudadanos sin seguridad de salud	35%	47%	45%	52%
% de ciudadanos que no recibe alguna pensión	7,01%	10,32%	11,11%	13,19%

A pesar de esta disparidad obvia, en vez de algunos programas por el desarrollo de lo rural, el enfoque del Estado ha sido en los centros urbanos donde la mayoría de la población es ubicada. La ruralidad es conceptualizada cada vez más como una zona para la explotación de los recursos para servir la ciudad. Con sus inicios en la época del neoliberalismo en Argentina, la mayoría de la inversión rural había llegado a través de las empresas agrícolas y mineras multinacionales, no obstante, el capital nacional está tratando reclamar un parte de esta cadena de producción (Gramont, 2004, p.281).

En Jujuy, esta visión de explotación es parte de la razón que algunas comunidades se han esforzado ganar sus títulos, desde el gobierno ha propuesto que la riqueza mineral en sus territorios será una herramienta por desarrollo en la zona. Aunque la exploración de los depósitos de litio y potasio empezó en los años setenta, cuando Chile abrió algunas minas en el Desierto Atacama, la explosión reciente de la demanda de litio para baterías de automóviles ha fomentado la inversión de algunos fabricantes de automóviles en las reservas de la zona. En marzo de 2013 Toyota, compró el 25% de una mina en Salar de Olaroz de Jujuy. La ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi explicó después de la firma del contrato que “el litio es parte fundamental de nuestra aspiración industrial”. A pesar de las preocupaciones de los ecologistas y los pueblos originarios que el proceso de extracción por el método del “cielo abierto”, Giorgi afirma que la

minería es segura y posee plan sustentable de desarrollo, explicando, “venimos a pedir asociarnos, con vistas al mediano y largo plazo” (Acuerdo para avanzar, 2013). Esta mina, que requeriría una inversión de 229 millones de dólares para extraer 17.500 toneladas de litio cada año, es solo uno de 33 proyectos planeados para la explotación de litio y potasio en la puna jujeña y salteña (El otro serpiente, 2012).

Aunque el gobierno ha prometido trabajos como resultado de estos proyectos, los pueblos originarios aseveran que las corporaciones internacionales que están explotando la minería no están creando puestos para los pobladores jujeños. Al mismo tiempo, señalan que los daños al medio ambiente en una zona con poca agua y la pérdida del modo de vida de los cosechadores de sal en las Salinas Grandes no valen las ganancias en el largo plazo. Hay 6.500 habitantes de las Salinas Grandes (El otro serpiente, 2013). Para ellos, la minería es un ataque a sus derechos constitucionales, como la garantía de su vida tradicional y del territorio ancestral, y una visión de desarrollo que no respeta las necesidades de la gente de la zona y su dependencia de un ecosistema frágil. Como explicó Esteban, un integrante de la APPP:

El estado gobierno no quiere dar los títulos a la tierra [...] es un problema también, no entregarte los títulos comunitarios, los títulos a la tierra y hay más espacio para que la minera entre. Es una pelea fuerte que controlan las empresas mineras. Pero bueno, el mismo gobierno, el estado o sea no te gestiona desarrollo ni o ponerla, no te gestiona planes o proyectos desarrollo por la zona o las regiones, la único que frente es la minera. El único desarrollo posible, el único desarrollo posible por la zona es la minería, nada más.

En su rechazo a entregar los títulos a las comunidades de las Salinas Grandes para proteger su modo de vida y sus derechos constitucionales, el estado es cómplice en la devaluación de la población indígena, con la Puna como una continuidad moderna de la metáfora del desierto (Trincherro 2000). Aunque la Red Puna ha movilizad para protestar el litio (El otro serpiente, 2012), la falta de apoyo por las comunidades rural permanece un desafío grande por los pueblos

originarios. En realidad, Esteban lamentó que “el gobierno digamos que, no saca políticas de desarrollo por la zona, [las políticas están] más concentradas en la zona urbana que en la zona rural [...] no hay una política desarrollo para lo rural”.

En lugar de los programas del Estado, la organización de la APPP ha iniciado una serie de programas para agregar valor a las producciones y recuperar los procesos y los productos tradicionales (Arzeno y Troncoso, 2010, 234). En las nueve comunidades de la APPP, la mayoría viven en la tierra por la cría de llama y oveja o la agricultura andina. Tradicionalmente, las comunidades han operado una economía de subsistencia y autosuficiencia, como Margarita explicó: “la papa cuando está acá [en la tienda], es 100 pesos cada bolsa. Nosotros no compramos, no gastamos los 100 pesos en la papa, gastamos en otras cosas y no la papa porque la papa ya tenemos. Y porque cosechamos y guardamos lo tenemos.” Sin embargo, la cultura de autosuficiencia está declinando, en cada comunidad un parte de la cosecha es por autoconsumo y otra parte para vender. Hoy en día, de media en la provincia de Jujuy, según al Registro Nacional de la Agricultura Familiar, casi un mitad de los agricultores que tiene producción de ganadería y vegetales no comercializa, otro mitad vende el 50% o más de su producción, y menos de 5% de los productores vende menos de 50% de su producción (Registro Nacional, 2012).

La APPP y la comercialización de los productos agropecuarios

El proyecto central de la APPP ha sido la comercialización de la carne de llama, principalmente por la carnicería en La Quiaca. La carnicería empezó con la asistencia del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) como un programa piloto para los productos agrícolas con valor agregado. Con esta subvención del estado, el APPP compró el equipo para

hacer y empaquetar los embutidos y las salchichas de llama y diversificó los productos hechos por la organización. Como describió Margarita, una empleada de la carnicería,

Sacamos muchos productos de la carne de llama, antes no había eso, había la carne, pero la hamburguesa de llama, ningún no había, hamburguesa que había, era de carne de vaca, y ahora no, tenemos hamburguesa, salame, lomito, mortadela también de llama. Se hace un montón de cosas de llama.

Los productos son empaquetados para vender en La Quiaca, Tilcara, San Salvador de Jujuy y Buenos Aires y también, estos productos elaborados se pueden vender a un precio mucho más alto. Por ejemplo, el precio de carne molida de llama en la carnicería es 20 pesos cada kilo, el precio de la mortadela es 105 pesos cada kilo. También, la carnicería compra entre ocho y doce llamas cada semana para procesar o vender en la tienda, proveyendo otro espacio por los pueblos a comercializar su carne, diferentes a los mercados locales en La Quiaca, Abra Pampa y Tilcara.

En adicción, la APPP vende las verduras de las comunidades en la carnicería y sus otros mercados, incluso en Buenos Aires donde los productores pueden recibir un precio más alto debido a sus productos son orgánicos. Esta ayuda, en la creación de nuevos mercados y el mejoramiento de los productos es un beneficio único la asociación. Cuando entrevisté Flor, la presidente de la comunidad con la agricultura más productiva del APPP, ella explicó que los programas del gobierno que existe para mejorar la agricultura solamente ayuda en el proceso de mecanización y no provee la ayuda necesaria para comercializar los productos inicialmente.

[El Estado] no te financia. Porque nosotros cuando sembramos así bien [...] no te ayudan nada. Y nivel provincial nada, ni local tampoco. En cambio la APPP por eso, gracias a la organización se sacó proyectos, financia dinero, económico todo eso, podemos mejorar la calidad de semilla, mejorar las canales de riego, [...] compró remedios. Pero el gobierno, no, ellos no te ayudan nada.

El mejoramiento de las semillas ha sido un programa central de la APPP, particularmente a través de la introducción de la papa temporal, una variedad específica que la hace no hay necesidad de regar y ha permitido dos siembras de papa cada año, minimizando al mismo tiempo

la retirada de agua. En adicción, la APPP participa en la feria de semillas organizada por la Red Puna, en la cual los agricultores de diferentes partes de la provincia pueden compartir e intercambiar semillas para preservar la biodiversidad cultural. Flor me dijo que alguien de la comunidad asisten cada feria, “vamos a rotando, una familia va a una feria, a otra feria va otra familia” para que todas las familias puedan aprender sobre la variedad de las semillas.

Los miembros de la organización también son capaces de aplicar para los micro-subsvencions del "bankita," un pequeño fondo de dinero que ayuda a los agricultores y productores en la realización de pequeñas mejoras en la infraestructura o la creación de nuevas empresas. Por ejemplo, la comunidad de Flor usó este fondo para reparar su sistema de riego y en la comunidad de Alberto, los oficiales están pensando para aplicar por el dinero necesario para hacer un camping comunitario o un pequeño calerita para producir cinco kilos por día para vender, que podrían ser una fuente de trabajo.

La meta central de estos programas de comercialización es la revalorización y preservación del patrimonio cultural de los campesinos aborígenes. En la esfuerza para crear puestos de trabajo dentro de la Puna y garantizar la rentabilidad de las chacras, la APPP trata asegurar una fuente de ingreso local para que los agricultores no necesiten migrar a las ciudades a encontrar un trabajo. Como Camila describe,

El rol, la objetivo de la asociación siempre ha sido mejorar la calidad de vida de los productores, en las familias de cada pueblo que integran las asociación. Trabajan fuertemente digamos, la carnerería, la venta de carne, el tema artesanal, el tema agricultura, como mejorar nuestro agricultura, mejorar los canales de riego, como tener una producción mejorada en cualidad y cantidad y variedad.

En la creación de los vínculos a nuevos mercados y su fomento de la expansión de la producción, la APPP está promoviendo el desarrollo de bajo impacto que se opone al modelo hegemónico de explotación propuesto por el Estado. En realidad, me dijo Esteban, “[tenemos un visión de]

desarrollo sustentable, trata [...] de ver lo que soberanía alimentaria de producir todo lo nuestro acá, trata de revalorizar las costumbres de muchas más antes”. Frente un sistema política y económica que ha empobrecido los pueblos originarios, la APPP está construyendo un mercado local y “moral” que asegura la continuación del modo de vida de los campesinos.

La Red Puna y la Artesanía

Tejer es una parte central de la artesanía tradicional de las mujeres de comunidades de los ganaderos de llama y oveja en la Puna, que las mujeres solían hacer y vender individualmente en los mercados públicos regionales. En estos mercados y “la mayoría de los canales de comercialización adquiere gran relevancia el “regateo”, es decir la negociación de rebajas en los precios por parte de los compradores” (Benedetti, 2012, p.246). Los productores fijaban los precios altos, pero generalmente con esta cultura de negociación, las mujeres vieron poco o ningún margen de beneficio. Con el aumento en el turismo a un tasa de 8% cada año, específicamente en la zona de la Quebrada, (Turismo y Cultura), el mercado ha sido inundado con los productos industriales y baratos de Perú y los tejedores tradicionales no pueden competir en el precio o la regularidad de los diseños como los turistas extranjeros o de otros partes de Argentina tienen una percepción de arte indígena es los textiles de muchos colores o los suéteres imprimidos con llamas. La artesanía real que solo usa tintas y lanas naturales es mucho más sutil y debido a los suéteres son hechos por mano, hay menos regulación de la calidad de la obra.

Por eso, la Red Puna inició un equipo de la artesanía que juntó mujeres de toda la Puna en una colectiva para comercializar los productos. . La Red Puna opera con una tienda en la ciudad de Tilcara, que promociona los productos a consumidores que estén dispuestos a pagar precios más altos por productos hechos a mano con el objetivo de colaborar con una causa social

y política. Este proyecto de comercialización de los productos de tejedores tuvo implicaciones importantes por la organización, como su trabajo fue publicado, y por las mujeres también. En Maimara, conocí Mirasol, una organizadora por la Red Puna hace tres años, quien opinó que:

Yo creo que más que nada en el grupo de las artesanías creo que más allá las artesanías de sí, que implicó un montón de cosas, por ejemplo el ingreso de la mujer de la casa, que no tenía antes, todo el dinero lo llevar el varón de la casa, desde ahí y desde a la cuestión más personal desde la mujer, digamos, desde el proyecto, les empoderó mucho.

Por la primera vez, estas mujeres tenían una capacidad de comercializar sus productos y acceso a su propio dinero. Para ampliar el mercado, las artesanías han empezado a trabajar para algunos diseñadores de Buenos Aires. Durante la fin de semana del 8 de noviembre de 2013, el equipo de artesanías de la Red Puna reunió por un taller con tres diseñadores que vinieron al centro de la Red Puna ubicado en Maimara por tres días para enseñar a las mujeres cómo usar los métodos tradicionales para crear estilos más rentables, tales como la combinación de tintas de plantas para crear colores más oscuros y la integración de lurex, un hilo metálico, en la lana.

En Jujuy, los mercados más importantes están en los centros de turismo, principalmente Tilcara, Purmamarca y Humahuaca. Allá, un suéter peruano sale 100 pesos y en la tienda de la Red Puna los suéteres cuestan un promedio de 500 pesos, que acaba cubre el costo de producción, incluso la mano de obra. En el segundo día del taller, que fue una discusión sobre el proceso de comercialización de los suéteres por los diseñadores, ellos explicaron que en la tienda de la diseñadora en Buenos Aires, el precio estaría fijar más cerca de 2000 pesos, dividido en partes iguales entre la diseñadora (30%), las integrantes de la Red (31.5%) y los gastos de comercialización (38.5), tales como el impuesto sobre valor agregado, las etiquetas y la máquina de tarjeta de crédito. La porción pagada a la Red Puna sería dividida para que la organización reciba 110 pesos para mantener sus operaciones y las mujeres ganen casi 500 pesos con el fin de

pagar por las materias y las horas de mano de obra a un tasa de 20 pesos cada hora (todavía menos del sueldo mínimo mandato por el Estado⁵).

La estabilidad de este contrato y la oportunidad de vender en Buenos Aires es importante por la Red Puna, si bien, los diseñadores tienen algunos intereses muy diferentes de las mujeres. Por ejemplo, la diseñadora encargada hizo un pedido inicial de 200 suéteres:

- 50 capitas (fino sin lurex)
- 50 suéteres cuadrado (fino sin lurex)
- 40 saco panal (mediano con lurex)
- 20 polleras (fino sin lurex)
- 20 saquito corto (mediano sin lurex)
- 20 suéteres ranglan (fino con lurex)

Por cada, ella tuvo un modelo y una paleta de colores que se desvían de los patrones tradicionales de las mujeres. También, las mujeres reportaron que como un colectivo, cada micro red solo puede producir entre dos y cinco suéteres cada semana. En respuesta de la presentación del pedido y el sistema de distribuir las ganancias, Liliana, una organizadora con la Red le preguntó al diseñador si él ha considerado la diferencia entre comercialización y la capitalización de los suéteres, como la solicitud de los diseñadores obligaría a las mujeres para aumentar la producción de manera espectacular, por encima de su nivel actual de 2 a 5 suéteres por micro red cada semana. Si bien, esta colaboración piensa revalorizar la artesanía indígena reversa el papel tradicional en el que las mujeres tienen poco poder para negociar, al mismo tiempo, esto se convierte en un debate difícil sobre el valor de la cultura debido a que a las mujeres se les pide a cambiar sus métodos de tejido para ganar más. Al decidir los precios por los suéteres, no es solo una discusión de los materiales y las horas de mano de obra; es un cálculo más complejo sobre el valor de cultura y los costos de cambiar los estilos tradicionales con el fin de ganar lo suficiente para mantener la viabilidad de las comunidades artesanales.

⁵ El sueldo mínimo por los empleados de personal doméstico que hacen tareas generales es \$25 cada hora (Salarios mínimos, 2013).

Aunque han tenido frente a una difícil decisión sobre la comercialización de la cultura y el cambio de sus tejidos tradicionales, las mujeres han ganado independencia económica que hace posible la continuación de la vida campesina aborígen. Mirasol explicó

Lo que piense, en todo eso, es una de las cosas más importantísima, más allá de logro el cuestión económica es real, ¿no? De llevar una plata a la plata que te ayudan económicamente, entonces es lógico no, que ellas necesitan. En ese sentido, creo que es un beneficio, y también, creo que es un beneficio en un nivel personal y colectivo como un grupo de mujeres.

El empoderamiento de la mujer ha sido una de las cosas más importantes en el proyecto de la artesanía. En los años iniciales de la Red Puna, todas las familias asistían las asambleas, pero según a Mirasol, las mujeres “no podrían hablar o podrían tomar ninguna palabra, hablaron los compañeros varones. Eran todos los compañeros allá, todas las familias, la mujer incluso igual, pero habló el varón”. Entonces, en 2012, la primera mujer fue elegida la presidente de la Red, representando un cambio progresivo para expandir los derechos de las mujeres en la Puna.

En realidad, el número de las mujeres que son oficiales en la Red Puna y la APPP me sorprendió. La junta directiva de la APPP consiste de tres hombres y cuatro mujeres. En La Quiaca conocí cinco presidentes de diferentes pueblos originarios, de los cuales tres eran mujeres. Margarita explicó este fenómeno como un síntoma de la migración afuera del campo, particularmente para tomar trabajos temporarios en la cosecha entre mayo y septiembre. Pero, si una familia tiene hijos, generalmente la mujer se queda en la comunidad, creando más oportunidad por su involucramiento.

La politización de la cultura y la construcción de identidad indígena

De manera interesante, en Argentina ser indígena se basa en la auto-identificación. La ley permite algún grupo que tiene una historia suficiente solicitar su personería jurídica. De hecho, en el sitio de web del Censo 2010, hay una serie de videos que estimulan a los ciudadanos

indígenas a declarar su ascendencia, y de hecho, la cantidad de los miembros de pueblos originarios contabilizados en las estadísticas ha aumentado de manera constante en los últimos censos. Según un video, “decíamos indígenas no significa que vivamos en los campos solamente, también vivimos en los pueblos, en los barrios en la ciudad, de hecho, la Constitución nacional los reconoce como pueblos pre-existentes... La identidad es un derecho de todos” (Pueblos Originarios). Esta desconexión entre lo indígena y el campo representa un cambio ideológico en la percepción y la perspectiva de la comunidad indígena.

Como se ha dicho en la definición de indio del Segundo Congreso Indigenista Interamericano de 1949, una parte de la cultura indígena es el mantenimiento de su manera de trabajo, lengua y tradición, aunque “éstas hayan sufrido modificaciones por contactos extraños” (Actas Finales, 1959, p.86). Por ejemplo, en Jujuy, donde la cultura histórica ha sido modificada por la invasión inca precolombina, la ocupación larga de los españoles comenzó hace 438 años con el asentamiento de Yavi y el empobrecimiento moderno bajo el Estado Argentino, el idioma materno se ha perdido y algunas nuevas prácticas, la más importante tal vez sea el catolicismo, se han adoptado. Hoy en día, una nueva consolidación de la cultura está ocurriendo con la revalorización de lo indígena, representado en el movimiento pan-andino que quiere el reconocimiento estatal del pluriculturalismo de las naciones. La lucha por la tierra en el noroeste de Argentina contribuyó a la consolidación de su propia imagen cultural por los pueblos originarios. Esteban explicó que la historia que reúne los pueblos originarios, “es un proceso de resistencia de lucha más que todo, como te digo que empezó la invasión lo que América, ahí vienen el resto lo que como la lucha del territorio”. Hace 200 años, opinó Esteban los pueblos ha luchado el Estado Argentino ya que,

Querían ponerle una cultura Europa, en Buenos Aires lo ves mucho, teatro, los... la cultura que viene [...] quizás el estado Argentino es traer una cultura nueva, quizás

pensando que era superior, pensando que era superior lo que en ellos lo vieron en ese modo, pero nunca se pusieron a pensar de la cultura que tenía los pueblos de acá, los pueblos originarios [...] lo que no ven es la riqueza que tiene cada pueblo”

Esta promoción histórica de la cultura europea continua hoy en día, perpetuada por geografía, como una mitad de la población que es predominantemente blanca, vive en la provincia de Buenos Aires. Los pueblos originarios, que son estimados ser entre 1,5% y 3% de la población, viven en la periferia del país (Resultados definitivos).

En contrario a la historia de Argentina que “ha sido uno de los países que con mayor empeño negó el aporte de los pueblos originarios a su matriz cultural” (Briones y Carrasco, 2006, p. 201), al nivel del estado, el movimiento pluricultural está encabezado por los estados de Bolivia, Ecuador y Venezuela que han adoptado políticas de conciencia ambiental y cultural que rompen con la norma hegemónica (Escobar, 2010, 46). En tres de mis entrevistas con los integrantes de la Red y la APPP, se mencionó la importancia del radicalismo del estado Boliviano. Ellos expresaron orgullo por el hecho de que finalmente un país de América Latina tenga un presidente indígena y los más jóvenes se identificaron más con el movimiento panandino de Perú y Bolivia que con el Movimiento Nacional Campesino Indígena. En 2014, la APPP abrirá una escuela de primaria para enseñar quechua. El Quechua nunca fue hablado por la comunidad Kolla de la Puna, aunque fue impuesto brevemente y forzosamente por el imperio inca en su corto reinado antes de la llegada de los españoles. Sin embargo la reintroducción de una lengua indígena es considerada una parte importante de la revalorización de la cultura y un símbolo de solidaridad con la región del norte.

Esta transición no es la degradación de la cultura, sino un intento deliberado de reconstruir una identidad histórica. En un sentido, el movimiento indígena se ha convertido en “constructores de la memoria, y al poner en acto su relato, dinamizan su propia trayectoria de

vida y habilitan la formación de una experiencia común. Apropiaada por los miembros de la comunidad, cada uno puede concretar el relato con la lucha, y en su continuidad” (Belli, Slavutsky, y Pueda, 2007, 116). La construcción de nuevas tradiciones y el desarrollo de una identidad pan-andino representan la construcción de una nueva cultura indígena politizada que es más radical en sus creencias, es anticapitalista un su dialogo y vinculada ideológicamente con el movimiento plurietnio y pluricultural de Bolivia.

Conclusiones

La Red Puna y la APPP han cambiado dramáticamente la posición de los pueblos originarios en la provincia de Jujuy. A través de sus manifestaciones vocales y radicales, los grupos han contribuido a la visibilización del movimiento indígena en la lucha por la tierra y el desarrollo de lo rural. Desde su fundación en 1995, la Red Puna y la APPP efectivamente han politizado el tema de la tierra por las manifestaciones, las cortes de ruta y los juicios que eventualmente forzó la entrega de los títulos. Ahora, que la distribución de la tierra está empezando en la Puna y los pueblos originarios son o serán dueños de su tierra ancestral, ellos tienen un capaz único para diseñar el programa de desarrollo por la zona que puede revalorizar y recuperar la producción tradicional. En la carnicería de la APPP, los talleres de tejedores de la Red Puna, las ferias de semillas y la continuación de reuniones mensuales que juntan los pueblos originarios de la Puna, ellos están iniciando un camino de desarrollo que rechaza la historia de opresión y la proposición por el gobierno para explotar la minería en la zona. En lugar del progreso de capitalismo, la Red Puna y la APPP están construyendo vínculos a través de la provincia para usar los recursos de sus comunidades en el interés de desarrollo sustentable.

Estos cambios han impactado la concepción de la cultura indígena. Económicamente, la mayoría de los sectores ha modernizado, como muestra la fábrica de la carne de llama para crear una cadena de valor. Este aumento en la rentabilidad de los productos indígenas ha contribuido al empoderamiento económica y social de las mujeres también, como ellas traen ingresos a la casa. Con el aumento en la importancia de las artesanías en el mercado indígena, la posición política de las mujeres ha crecido también. Estos cambios desafían el modelo colonial que representa el indio como atrasado e incapaz de unirse al mundo moderno. Más bien, la construcción consciente de una identidad pan-andina indica que la cultura de los pueblos originarios está en flujo. La situación no es que los indígenas no entienden el mercado, sino que han buscado una vía de desarrollo que rechaza conscientemente la norma capitalista hegemónico en el interés de sostener la cultura tradicional. El movimiento indígena que busca recuperar y revalorar la cultura indígena por comercialización es en su infancia, pero el resultado de este experimento podría tener implicaciones importantes por nuestra concepción de desarrollo sustentable.

Bibliografía:

Actas Finales de los Tres Primeros Congresos Indigenistas Interamericanos (1959). Ciudad de Guatemala: Publicaciones del Comité Organizador del IV Congreso Indigenista Interamericano.

Acuerdo para avanzar en la industrialización del litio (9 de julio de 2013). Página 12.

Recuperado 30 de noviembre de 2013: <http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-224091-2013-07-09.html>

Arenzo, M. y Troncoso, C. (2010). Actividades agrarias, turismo y contradicciones del desarrollo en la Quebrada de Humahuaca, Jujuy, capítulo en en Manzanal, M. y Villarreal, F. (orgs.) El desarrollo y sus lógicas en disputa en territorios del norte argentino. Buenos Aires, Ediciones Ciccus. p, 223-246.

Belli E. y Slavutsky R. (2009). Gestiones patrimoniales y prácticas profesionales.” Comp. Manasse, B. y Arenas, P. Arqueología, tierras y territorios: conflictos e intereses. Tucumán: por autor. (Lucrecia Editorial, Libro de Edición Argentina): p. 143-163.

Batalla, G.B. (19XX). El concepto de indio en América.

Belli E., Slavutsky R. y Pueda P. (eds.) (2007). Malón de la Paz “una historia, una camino.” Programa Institucional de Investigación y extensión, “Memorias de la opresión.” Tilcara, Instituto Interdisciplinario Tilcara.

Benedetti, C. M. (2012). Producción artesanal indígena y comercialización: entre los “buenitos” y los “barateros”. Maguaré, 26.1, p. 229-262.

Brazo, Ana Lucia et. al. “Los Señores de la Soja.” Colección Becas de Investigación. Buenos Aires: Classico, 2010.

Briones, C. y Carrasco, M. (2006) La lucha por la tierra. (Neo)indigenismo estatal y producciones indígenas en Argentina (1985-1999). En Cruz, E. y Paoloni, R. (compiladores), Propiedad de la tierra Pasado y presente (p. 201-228). Córdoba: Alción Editora.

Caudullo, P. y Copa D. (n.d.). Asociación de Pequeños Productores de la Puna. [Volante]. La Quiaca, Argentina.

Constitución de la Nación Argentina (1994). Recuperado 26 de noviembre de 2013:

<http://www.constitution.org/cons/argentin.htm>

Constitución de la Provincia de Jujuy. (n.f.). Recuperado de:

<http://www.eft.com.ar/legislac/argentina/jujuy/jujuy-constitucion.htm>

Convenio No. 169. (2013). Organización Internacional de Trabajo. Recuperado 26 de noviembre de 2013: <http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--es/index.htm>

Edelman, M. (2005). Bringing the Moral Economy Back In...to the Study of 21st Century Transnational Peasant Movements. *American Anthropologist*, 107(3), 331-245.

Escobar, A. (2010). Latin America at a Crossroads. *Alternative Modernisations, Postliberalism, or Portdevelopment?* <http://aescobar.web.unc.edu/written-texts/>

Fernandez, D. R. (2012). Programa 16 - Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas.

Informe de Auditoria, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Recuperada 29 de noviembre de 2013: http://www.agn.gov.ar/informes/informesPDF2012/2012_083.pdf

Fernandez, J.M.F. (2009). Indigenismo. En Román Reyes (Dir): *Diccionario Crítico de Ciencias Sociales. Terminología Científico-Social*, Tomo 1/2/3/4, Ed. Plaza y Valdés, Madrid-México 2009

Grammont, H. (2004). La nueva ruralidad en América Latina. *Revista Mexicana de Sociología*, 66, p.279-300.

Ley 21.160. (2006). Información Legislativa. Recuperado 27 de noviembre de 2013:
<http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/122499/norma.htm>

Madrazo, G. (1982). *Hacienda y Encomienda en los Andes: La Puna Argentina bajo el Marquesado de Tojo. Siglos XVII a XIX*. Buenos Aires, Fondo Editorial.

Mombello, L. (2002). *Evolución de la Política Indigenista en Argentina*. Proyecto: Self-sustaining Community Development in Comparative Perspective. Coordinado por el Center for Latin American Social Policy (CLASPO) at The University of Texas at Austin. Recuperado 23 de noviembre de 2013: <http://lanic.utexas.edu/project/laoap/claspo/dt/0004.pdf>

Nadal, A. (2009). *La Reprimarización de América Latina: Política macroeconómica y medio ambiente*. CISDA IV. La Ponencia realizada de Bogotá, Colombia. Recuperada 27 de noviembre de 2013:

http://www.idea.unal.edu.co/eventos/CisdaIV/conf_curso/CEE_ALEJANDRO%20NADAL_Macroec_Medio_Ambiente.pdf

Otra serpiente que viaja por la sal. (29 de marzo de 2012). Página 12. Recuperado 30 de noviembre de 2013: <http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-190674-2012-03-29.html>

Paco, F. P. (2004) *Sistema Comunal. Una Propuesta Alternativa al Sistema Liberal*. La Paz, CEA.

Pontón, R. (2008). Capítulo 22: La importancia de la soja para Argentina. *El Balance de la Economía Argentina*, p. 1-4. Recuperado 30 de noviembre de 2013:

<http://www.bolsacba.com.ar/files/C2208.pdf>

Pueblos Originarios (n.d.). Censo 2010, INDEC. Recuperado de 29 de noviembre de 2013:
http://www.censo2010.indec.gov.ar/archivos/prensa/spot_originarios.mp3

¿Quiénes Somos? (2013). Movimiento Nacional Campesino Indígena. Recuperado 28 de noviembre de 2013: <http://mnci.org.ar/about/>

Registro Nacional de la Agricultura Familiar, Caracterización estadística de los productores de Jujuy. (2012). Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Recuperado 27 de noviembre de 2013: <http://www.renaf.minagri.gob.ar/documentos/InformeProvincial2012-Jujuy.pdf>

Resultados definitivos. Variables seleccionadas. Total del país. (n.d.). Censo 2010, INDEC. Recuperada 29 de noviembre de 2013
http://www.censo2010.indec.gov.ar/resultadosdefinitivos_totalpais.asp

Romero, S.M. (2005). Condición nutricional en la puna argentina. (2005). Observatorio Medioambiente, 8, p. 111-125.

Salarios mínimos en Argentina desde el 1° de Agosto de 2013 al 1° de enero de 2014. (2013). Elsalario.com.ar. Recuperado 1 de diciembre de 2013:
<http://www.elsalario.com.ar/main/Salario/salario-minimo>

Scott, J. (1976). The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. Hartford: Yale University Press.

Soberanía y recursos naturales (25 de noviembre, 2013). Pagina 12. Recuperado 30 de noviembre de 2013: <http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-234295-2013-11-25.html>

Teruel, A. y Fandos C. (2009). Procesos de privatización y desarticulación de tierras indígenas en el norte de Argentina en el siglo XIX. Revista Complutense de Historia de América, 35, p.

233-255. Recuperado 30 de noviembre de 2013:

<http://revistas.ucm.es/index.php/RCHA/article/viewFile/RCHA0909110233A/28415>

Thompson, E.P. (1991). *Customs in Common*. New York: New Press.

Thompson, E.P. (1971). *The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century*. *Past & Present*, 50, 76-136.

Trinchero, Hugo (2000) *los dominios del demonio. Civilización y barbarie en las fronteras de la Nación. El Chaco Central*. EUDEBA, Buenos Aires.

Turismo y Cultura (n.d.). *Descubrí Jujuy*. Recuperado 1 de diciembre de 2013:

http://www.turismo.jujuy.gov.ar/index.php?option=com_jnewsletter&act=mailing&task=view&istid=36&mailingid=468&listype=1&Itemid=999&lang=en

The World Bank (2013). *Agriculture, value added (% of GDP) [data set], Urban Population (% of total) [data set]*. Retrieved 30 November, 2013:

<http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS/countries/all?page=6&display=default>

Entrevistas:

Alberto. Entrevista Personal. 14 de noviembre de 2013.

Camilla. Entrevista Personal. 14 de noviembre de 2013.

Esteban. Entrevista Personal. 12 de noviembre de 2013.

Flor. Entrevista Personal. 15 de noviembre de 2013.

Margarita. Entrevista Personal. 14 de noviembre de 2013.

Mirasol. Entrevista Personal. 9 de noviembre de 2013.